

Santiago de Cali, treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintidós (2022).

Auto Interlocutorio No. 465

RADICACIÓN	76147-33-33-003-2022-00406-01
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO adecuado a EJECUTIVO
DEMANDANTE	JOSE LIBARDO DIAZ GIRALDO genarorestrepozuluaga2018@gmail.com
DEMANDADO	MUNICIPIO DE BOLIVAR, VALLE
MAGISTRADO PONENTE	VÍCTOR ADOLFO HERNÁNDEZ DÍAZ
ASUNTO	CONFIRMA AUTO QUE RECHAZÓ DEMANDA POR CADUCIDAD DEL MEDIO DEL CONTROL EJECUTIVO

I. OBJETO DE LA DECISION

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto de 15 de julio de 2022 proferido por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cartago (Valle), que rechazó la demanda por caducidad.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda.

El demandante, a través de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Municipio de Bolívar (Valle), con el fin que se declare la nulidad del acto ficto o presunto que debió expedirse como respuesta a la reclamación administrativa radicada el 16 de agosto de 2018, respecto a los intereses de la sentencia de segunda instancia del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca No. 624 del 09 de octubre de 2014.

Como consecuencia de lo anterior, pretende se ordene al ente territorial demandado pagar los intereses moratorios de la referida sentencia.

2.2. Hechos.

El Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia No. 624 del 09 de octubre de 2014 proferida dentro del proceso con radicación No. 76147-33-31-001-2009-00234-01, acción de reparación directa incoada por el demandante José Libardo Díaz Giraldo en contra del Municipio de Bolívar (V), decidió modificar la sentencia proferida el 14 de abril de 2011 por el entonces Juzgado Único Administrativo del Circuito de Cartago, en cuanto al monto de los perjuicios reconocidos. La sentencia de segunda instancia quedó ejecutoriada el 24 de octubre de 2014.

El 10 de febrero de 2017 la alcaldesa del municipio de Bolívar (V) y el señor José

Libardo Díaz Giraldo suscribieron acuerdo de pago por el valor de \$128.709.242, correspondiente a saldo pendiente de cancelar de la sentencia a favor del segundo.

Obra petición con asunto denominado *“reclamación administrativa intereses de mora sentencia proceso de repación (sic) directa”* del proceso con radicado No. 2009-00234, dirigido al alcalde del Municipio de Bolívar que, según lo indicado en la demanda, fue presentada el 16 de agosto de 2018.

2.3. La providencia recurrida.

El juzgado rechazó la demanda por caducidad bajo los siguientes argumentos:

Indicó que el derecho que se reclama, esto es, los intereses de mora, no emanan del acto administrativo presunto negativo, sino de la sentencia judicial en firme que, según lo dispuesto en el artículo 297 del CPACA, constituye título ejecutivo. Por lo anterior, adecuó el medio de control al proceso ejecutivo.

En relación con la oportunidad para formular la demanda ejecutiva señaló que, la sentencia proferida en segunda instancia dentro del proceso con radicación 76147-33-31-001-2009-00234-01 quedó debidamente ejecutoriada el 24 de octubre de 2014, por lo que se hizo ejecutable 18 meses después (al haber sido una sentencia dictada de conformidad con el C.C.A.), es decir, a partir del 25 de abril de 2016 y, los 5 años para acudir a la jurisdicción vencieron el 25 de abril de 2021.

Dijo que, descontando la suspensión de términos judiciales entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020, dicho término venció el 09 de agosto de 2021, y como quiera que la demanda fue presentada el 18 de mayo de 2022, estuvo radicada por fuera del término legal de que trata el literal k) del ordinal 2° del artículo 164 del CPCA.

2.4. Argumentos del recurso.

La parte demandante apeló. Argumentó que el acto ficto o presunto que se demanda nace del reclamo de los intereses de la sentencia judicial porque ese derecho fue cercenado con el acuerdo de pago suscrito el 10 de febrero de 2017, donde se obligó al demandante a renunciar a los intereses de mora para poder recibir el pago de la sentencia, ya que se hizo constar que renunciaba a cualquier acción o reclamación en contra de la entidad territorial demandada. Por ello no era posible iniciar el proceso ejecutivo.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación contra el auto que rechazó la demanda ejecutiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 125, literal g)¹ y 243, numeral 1² de la Ley 1437 de 2011 modificado por los artículos 20 y 62 de la Ley 2080 del 25 de enero de 2021, respectivamente.

¹ “La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas:

(...) 2. Las Salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias: (...)

g) Las enunciadas en los numerales 1 a 3 y 6 del artículo 243 cuando se profieran en primera instancia o decidan el recurso de apelación contra estas.”

² “Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia:

(...)

1. El que **rechace la demanda** o su reforma, y el que niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo.

(...)”

3.2. Problema Jurídico.

El problema jurídico consiste en determinar si procede la adecuación al medio de control ejecutivo y el rechazo por caducidad, al reclamarse en el sub judice el derecho a intereses que emergen de una sentencia judicial.

3.3. Tesis.

Encontró probado la Sala que, la parte demandante aceptó renunciar al pago de los intereses en la suscripción del acuerdo de pago, sin embargo, en caso de presentarse alguna inconformidad respecto del mismo, la acción procedente correspondería al medio de control ejecutivo y no, a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, como lo pretende la parte actora. Por tanto, al reclamarse en el sub judice el derecho a intereses que emergen de una sentencia judicial, es procedente adecuar el medio de control al ejecutivo, el cual al momento de presentarse la demanda (18 de mayo de 2022), ya había operado la caducidad de la acción, motivo por el cual la Sala confirmará la sentencia de primera instancia.

3.4. Caducidad – Recuento jurisprudencial.

La caducidad es una figura jurídico-procesal mediante la cual se extingue el derecho acción y opera cuando se deja vencer el plazo que el legislador ha establecido para el reclamo de cierto interés jurídico. Esa extinción del derecho a reclamar se justifica por la salvaguarda del principio constitucional de seguridad jurídica, que tiende a evitar que algunas situaciones permanezcan indefinidas en el tiempo. Es decir, la caducidad pretende dotar de estabilidad las relaciones y situaciones jurídicas que no son discutidas en un lapso de tiempo razonable

Sobre el particular, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado (2021)³ ha dicho que *«la exigencia de respetar los límites temporales que han sido dispuestos para el ejercicio y exigencia de los derechos, propende por la consolidación del orden público y la paz en las relaciones sociales, y fortalece la seguridad jurídica en favor de los asociados, a quienes, en el ejercicio de sus derechos al debido proceso y al acceso a la justicia, se les demanda actuar con diligencia y eficacia a fin de que sus pretensiones puedan ser resueltas con carácter definitivo por un juez con competencia para ello. Correlativamente, la institución de la caducidad permite a quienes son sujetos pasivos de las demandas, tener certeza sobre hasta cuándo pueden estar sometidos a requerimientos judiciales por una determinada causa»*.

3.5. Caso Concreto

En el presente asunto, la parte demandante radicó demanda a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin que se declare la nulidad del acto ficto o presunto que surge del silencio administrativo negativo de la petición radicada ante la entidad demandada el 16 de agosto de 2018, por medio del cual solicitó el pago de los intereses de mora que emergen de la sentencia judicial proferida dentro de la acción de reparación directa con radicación No. 76147-33-31-001-2009-00234-01.

El *a quo* rechazó la demanda. En primer lugar, consideró que la presente demanda corresponde al medio de control ejecutivo, toda vez que la reclamación de los intereses moratorios nace del título ejecutivo configurado de la sentencia judicial del proceso ordinario referenciado. Luego, señaló que, a la fecha de radicación de la demanda había operado el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control ejecutivo.

³ Providencia del 22 de noviembre de 2021, expediente 20001-23-33-000-2013-00063-01(54263).

El recurrente, señaló como argumento que, en el acuerdo que suscribió en el año 2017 con la entidad territorial, fue engañado para no reclamar ejecutivamente los intereses derivados de la condena judicial y que, por tanto, no cuenta con otro medio judicial para reclamar los mismos.

Revisado el plenario, se encontró el acuerdo de pago suscrito el 10 de febrero de 2017 por el demandante y la entidad accionada, en virtud de la condena impuesta en las sentencias judiciales proferidas dentro del proceso de reparación directa No. 76147-33-31-001-2009-00234-00, por valor de \$128.709.242.00.

Igualmente, se observa que, en ese mismo acuerdo, se estipuló:

“Una vez cumplido el presente acuerdo de pago el señor JOSE LIBARDO DIAZ GIRALDO, renuncia a ejercer cualquier acción o reclamación en contra del MUNICIPIO DE BOLIVAR por concepto de cumplimiento de la sentencia judicial fallada a favor del Demandante JOSE LIBARDO DIAZ y en contra de la Demandada MUNICIPIO DE BOLIVAR (V), dentro del proceso que cursó en el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Descongestión del Circuito de Cartago bajo la radicación No. 2009-00234”.

De lo anterior, advierte la Sala que entre las partes se celebró un acuerdo en el que la parte demandante aceptó el pago total de la obligación derivada de las sentencias judiciales.

Sin embargo, la parte demandante pretende a través del medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho, obtener el cobro de los intereses moratorios derivados de esa obligación, al considerar que la acción ejecutiva no era procedente por haber renunciado a la misma al momento de la suscripción del acuerdo de pago con la entidad demandada.

Al respecto, considera la Sala que, la parte demandante aceptó renunciar al pago de los intereses, sin embargo, en caso de presentarse alguna inconformidad sobre el acuerdo de pago, la acción procedente correspondería al medio de control ejecutivo y no, a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, como lo pretende la parte actora.

Por tanto, vislumbra la Sala que lo que busca la parte actora con la radicación de la solicitud, es revivir los términos judiciales a través de un medio de control que no es procesalmente viable.

Ahora bien, respecto de la adecuación del medio de control, se tiene que el artículo 171 del CPACA permite a los operados judiciales, en el evento que la parte demandante haya indicado una vía procesal inadecuada, darle el trámite que le corresponda a la demanda.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, conforme la facultad que tiene el juzgador, tal como lo realizó el *a quo*, es procedente adecuar el medio de control al ejecutivo.

En sentido, de acuerdo con el literal k) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 el término para solicitar la ejecución será de 5 años contados a partir de la exigibilidad de la obligación.

Para conocer la fecha en que la presente obligación se hizo exigible se debe recurrir a lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 que sobre su régimen de transición y vigencia dispuso: *“los procesos en curso a la vigencia de la presente ley*

seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior” [refiriéndose al Decreto 01 de 1984 – C.C.A.].

En el caso particular, las sentencias judiciales proferidas dentro del proceso de reparación directa No. 76147-33-31-001-2009-00234-01, constituyen el título ejecutivo. Esta demanda ordinaria fue presentada en vigencia del Decreto 01 de 1984 y misma culminó con la aplicación del citado régimen.

Así entonces, para conocer la fecha en que se hizo exigible la obligación se debe recurrir a lo previsto en el artículo 177 del C.C.A. que disponía que, tratándose de sumas de dinero, las condenas solo serían ejecutables **18 meses después de la ejecutoria de la providencia que contiene la obligación**, lo cual en el sub lite no ha ocurrido.

En este punto se verifica que la sentencia No. 624 del 09 de octubre de 2014 proferida por esta Corporación, dentro del proceso de reparación directa con radicación No. 76147-33-31-001-2009-00234-01, quedó ejecutoriada el **24 de octubre de 2014**, por lo que el término de 18 meses previsto para la ejecución de la condena se cumplió el 25 de abril de 2016. Así las cosas, en el presente caso, el término de cinco años para acudir a la jurisdicción se cuenta desde el 25 de abril de 2016 e iría hasta el **25 de abril de 2021**.

El juzgado consideró que el término de caducidad se suspendió a raíz de la pandemia.

Al respecto se aclara que el Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdos PCSJA-11517, PCSJA20-11518, PCSJA-11519, PCSJA-11521, PCSJA20-11526, PCSJA-11527, PCSJA-11528, PCSJA-11529, PCSJA-11532, PCSJA-11546, PCSJA-11549, PCSJA-11556 y PCSJA-11567 suspendió los términos judiciales a partir del **16 de marzo de 2020** por motivos de salubridad pública y fuerza mayor con ocasión de la pandemia de la COVID-19; y mediante Acuerdo PCSJA-11581 del 27 de mayo de 2020, dispuso levantar la suspensión a partir del **1º de julio de 2020**.

A su vez, el artículo 1 del Decreto Legislativo No. 564 de 2020 consagró:

“Artículo 1. Suspensión términos de prescripción y caducidad. Los términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para derechos, acciones, medios control o presentar demandas ante la Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de meses o años, se encuentran suspendidos desde el 16 marzo 2020 hasta el día que el Consejo Superior de la Judicatura disponga la reanudación los términos judiciales.

El conteo los términos de prescripción y caducidad se reanudará a partir del día hábil siguiente a la fecha en que cese la suspensión términos judiciales ordenada por Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, cuando al decretarse la suspensión de términos por dicha Corporación, el plazo que restaba para interrumpir prescripción o hacer inoperante la caducidad era inferior a treinta (30) días, interesado tendrá un mes contado a partir del día siguiente al levantamiento de la suspensión, para realizar oportunamente la actuación correspondiente.”

Por lo tanto, los términos judiciales estuvieron suspendidos entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020; el 1º de julio se reanudó el cómputo.

Sin embargo, esta Sala de Decisión en casos anteriores ha declarado que la suspensión solo tiene incidencia en aquellos procesos en que la caducidad vencía en los 30 días siguientes al decreto de la suspensión, porque se otorga un mes, contado a partir del 1º de julio, para presentar la demanda.

Así las cosas, la suspensión de términos por la pandemia no tuvo ninguna injerencia en este caso, porque, se insiste, la caducidad vencía el **25 de abril de 2021**.

Conforme lo anterior, es claro que al momento de presentarse la demanda (**18 de mayo de 2022**), ya había operado la caducidad de la acción.

En ese orden de ideas, la decisión recurrida será confirmada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Decisión,

R E S U E L V E:

PRIMERO: CONFIRMAR el Auto proferido el 15 de julio de 2022 por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cartago (Valle), por medio del cual rechazó la demanda por caducidad, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión por estado.

TERCERO: REALIZAR las anotaciones respectivas en Samai y, ejecutoriada esta decisión, **DEVOLVER** el expediente digital al juzgado de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Providencia discutida y aprobada en Sala Virtual de la fecha, según consta en acta que se entrega a la Secretaría de la Corporación por medios virtuales, atendiendo las circunstancias de salubridad pública que se presentan en el país a raíz del COVID-19 y suscrito electrónicamente en la plataforma <http://samairj.consejodeestado.gov.co> en donde se puede corroborar su autenticidad.



ZORANNY CASTILLO OTALORA
Magistrada



ANA MARGOTH CHAMORRO BENAIDES
Magistrada



VÍCTOR ADOLFO HERNÁNDEZ DÍAZ
Magistrado